

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Exp. 015-2020-00416-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de LUZ MARLENE JARAMILLO GONZÁLEZ frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que se adelantó en contra de COLPENSIONES.

Se reconoce personería para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Anyta Camila Mosquera Betancourt, con tarjeta profesional No. 340.503 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES:

En sentencia proferida el 16 de abril de 2021 la juez de primera instancia, declaró que a la demandante no le asistía el derecho a la pensión de invalidez perseguida y absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda imponiendo las costas de la instancia a cargo de la actora, fijando como agencias en derecho la suma de \$908.526 (Archivo13 Primera Instancia). Esta decisión, se revocó por esta Sala de Decisión y en su lugar dispuso el reconocimiento de la prestación a partir del 27 de agosto de 2012, otorgando un retroactivo pensional calculado hasta el 15 de mayo de 2019 por \$59.391.125 con absolución de los intereses de mora pero con inclusión de la actualización monetaria para la fecha del pago. En

ese orden, se dispuso que las costas en ambas instancias estarían a cargo de Colpensiones, fijando por agencias en derecho en la sede de alzada \$1.000.000 (Archivo 08 Segunda Instancia).

Con estos referentes el Juzgado por decisión del 02 de septiembre de 2022 aprobó la liquidación de costas incluyendo por agencias en derecho de esa instancia la suma de \$2.969.556 (archivo 21 Primera Instancia), decisión frente a la cual la demandante presentó recurso de reposición, y en subsidio suyo elevó el de apelación argumentando que acorde a los factores que han de tenerse en cuenta para la debida tasación y al valor del retroactivo ordenado en esta sede las costas procesales deben ser superiores, no encontrando la suma fijada ajustada a la ponderación de los criterios de duración, y calidad de representación, por lo que sugiere la modificación de la providencia.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no aumentar la estimación de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas.

Pues bien, por sabido se tiene que, para la estimación de las agencias en derecho, debe acudir a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro limite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de primera instancia para los procesos de mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra infundados los argumentos de la apelación, ya que basta poner de relieve el quantum de las condenas emitidas en este trámite, para advertir que las agencias en derecho fijadas están definidas dentro de los rangos dispuestos por el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, encontrando que los \$2.969.556 tasados en favor de la promotora de la acción corresponden al 5 % de lo condenado, lo que respeta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, no siendo de recibo en esos términos, que el valor se modifique con un incremento, con la valiosa precisión referida a que no le es imperativo a los falladores sujetarse el tope máximo definido como lo pretende la apelante, pues el rango establecido simplemente orienta al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso.

De ese modo, precisamente atendiendo los criterios de duración y labor de representación es que se vislumbra atinado el valor impuesto, en tanto se trató de un trámite meramente documental, donde para el otorgamiento de la pensión de invalidez solo se hizo justa la aplicación de los principios constitucionales que regulan el tema, sin que se esté en frente de un asunto de elevada complejidad que desprendiera un esfuerzo jurídico mayor en la representante judicial, cuya duración en la primera instancia no excedió los seis meses, etapas en las que la apoderada tuvo la intervención necesaria para promover la acción judicial, agotar la audiencia concentrada que se celebró el 16 de abril de 2021 con presentación de alegatos y el recurso de alzada, circunstancias que revelan que los valores señalados se encuentran dentro del marco establecido por la normativa en cita, con coherencia y proporcionalidad a lo debatido, luego, se considera razonable que las costas impuestas se mantengan.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS N° 13 fijados hoy en la secretaria
de este Tribunal, a las 8 a.m.
Medellín 30/01/2023

Secretario.